

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2018

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA Nº 952

Impreso el día 7 de noviembre de 2018

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2019. (C.D.-32, 36 y 37/18)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de ley venido en revisiónn registrado bajo expediente CD-32/18 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, el expediente CD-36/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (referencia CD-32/18) y el expediente CD-37/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (referencia CD-32/18), y por las razones expuestas en el informe que se acompaña, y las que dará oportunamente el miembro informante, se aconseja su rechazo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 6 de noviembre de 2018

Marcelo J. Fuentes

INFORME

Honorable Senado:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de ley venido en revisión registrado bajo Expediente CD-32/18 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, el Expediente CD-36/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión

de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (Ref. CD-32/18) y el Expediente CD-37/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (referencia CD-32/18),

El proyecto que se pretende sancionar tiene como principal objetivo darle aprobación legislativa al Programa de Gobierno para el año 2019 condición sine qua non que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar un nuevo acuerdo sobre la base de sus exigencias.

En tal orden, el proyecto de Presupuesto diseñado por este Gobierno para el año 2019, obtuvo media sanción legislativa en la Honorable Cámara de Diputados durante las jornadas del miércoles 24 de octubre y jueves 25 de octubre próximo pasado, en las cuales se debatió durante más de dieciocho horas los términos de este nuevo cálculo de gastos y recursos que presentó el Gobierno Nacional para su aprobación.

Lo cierto es que, luego de la aprobación en la Cámara baja en medio de incidentes producidos al inicio de la jornada de debate, el FMI aprueba un nuevo acuerdo con la República Argentina que compromete una ampliación del Acuerdo Stand-By a unos U\$S 56.300 millones de dólares; U\$S 5.700 millones ya fueron recibidos el día 30 de octubre próximo pasado, U\$S 7.700 millones serán recibidos en diciembre y otros 11.000 millones en marzo de 2019. Es decir, en solo seis meses se recibirán U\$S 24.400 millones

En este sentido, en consonancia con lo manifestado por el Bloque del Frente para la Victoria - Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, es que se fundamenta el rechazo al proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019 en que el mismo no es más que un reflejo de la política económica que el Gobierno ha llevado adelante durante los últimos tres años.

Así, este Presupuesto no hace más que profundizar los graves impactos económicos y sociales que se han observado hasta la fecha.

Acompañar este Proyecto de Ley sería convalidar la política de ajuste, endeudamiento, desindustrialización y centralismo desplegada por el Poder Ejecutivo Nacional. Lo sostuvimos en ambos Bloques de las Cámaras Alta y Baja del Congreso de la Nación en oportunidad del tratamiento del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 hoy vigente y lo reforzamos ahora, con más énfasis aún, por múltiples motivos que se sintetizan en el presente informe.

Entre los múltiples motivos que fundamentan nuestro rechazo al presente Presupuesto es que, de igual modo como sucedió en el marco del tratamiento del Presupuesto para el año 2018, el 27 de diciembre de 2017 este Honorable Cuerpo votaba por la sanción definitiva del Presupuesto para levantarse unas horas después de ese

debate con una Conferencia de Prensa integrada por el Gabinete Económico y sellada por el Jefe de Gabinete de Ministros modificando las metas y objetivos que tan sólo unas horas antes los Senadores de la Nación habían aprobado.

Y como la historia se repite como comedia y otras veces como tragedia, éste último es el caso que nos ocupa lamentablemente, es que el próximo 14 de noviembre los señores y señoras Senadores y Senadoras nos someteremos a una votación ficticia, irreal: se pondrá a votación un Presupuesto que no contempla las condiciones y el impacto del Acuerdo con el FMI.

Tal y como se refleja en el dictamen de minoría de nuestro bloque en la Cámara de Diputados, el Presupuesto se sustenta en un esquema general de política económica que ha sufrido alteraciones fundamentales producto del Acuerdo, volviendo irreales todas las proyecciones del escenario macroeconómico y de gastos e ingresos.

El FMI no se sentará en ninguna de las bancas de los señores y señoras Senadores y Senadoras y, sin embargo, dirimirá el curso de la economía de nuestra Nación, y por lo tanto, de todos y todas los y las habitantes de nuestro suelo.

Como expresaron nuestros compañeros y compañeras del Bloque FPV-PJ en el Dictamen de Minoría presentado, el Proyecto de Ley de Presupuesto propone una profundización del ciclo de ajuste, especulación, endeudamiento, fuga de capitales y erosión del federalismo iniciado desde el inicio del gobierno de Cambiemos.

Aún asumiendo las falsas proyecciones presentadas, es un Presupuesto que cristaliza un ajuste brutal, donde la única excepción al declive generalizado de los gastos e inversiones públicas son los servicios vinculados a la deuda pública -de cumplirse las proyecciones del Presupuesto, para el año 2019 se habrán incrementado en términos nominales un 48%, y esto considerando un tipo de cambio de \$40,1 por dólar-.

Al mismo tiempo que crece la deuda, se recortan inversiones en Ciencia, Tecnología, Salud, en las jubilaciones y en las asignaciones, en los recursos a las provincias -en particular a la Patagonia-.

Entonces, este nuevo Presupuesto continúa comprometiendo severamente no sólo el futuro financiero del próximo Gobierno, sino el futuro y por tanto el destino de los más de 40 millones de argentinos y argentinas.

Por supuesto que el préstamo de los más de cincuenta mil millones de dólares por parte del FMI no es gratuito. El Gobierno, a cambio de los desembolsos del FMI, se comprometió a ratificar el sendero de brutal ajuste fiscal, contracción de los agregados monetarios –el crecimiento de la base monetaria será de 0% hasta junio de 2019- y un tipo de cambio flotante con intervenciones “limitadas” en determinantes niveles.

En definitiva, lo que implica este Acuerdo es la pérdida de soberanía económica, cediendo el control de todas las herramientas de política económica. Además, para llegar a cumplir la meta de déficit fiscal cero para el 2019, se plantea la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo cual, según el Organismo, contribuiría a reducir el déficit fiscal en el equivalente al 0,4% del PBI.

En este orden, en el informe realizado por el Organismo y dado a conocer hace pocos días, el propio FMI expresó sus reparos respecto a la sostenibilidad de la deuda, especialmente debido a la alta proporción de deuda nominada en dólares. También admitió que el escenario económico y los indicadores de deuda empeoraron desde el último Acuerdo y señaló casi eufemísticamente que la deuda argentina es “sostenible pero no con alta probabilidad”. Asimismo, alertó que el ajuste que la Argentina se propone llevar a cabo es uno de los más estrictos dentro de los países que tuvieron acuerdos Stand-By con el organismo: está dentro del 5% de los ajustes más estrictos a afrontar por un país suscripto a un acuerdo de esta naturaleza.

En materia de proyecciones podríamos mencionar porcentajes según se trate de la versión más optimista o bien la más pesimista por parte tanto del Gobierno Nacional como del Fondo Monetario Internacional.

En este sentido, la visión más optimista de la Alianza de Gobierno cambiemos indicaría una caída del -0,5% del PBI para 2019 mientras que el optimismo del FMI oscilaría una caída del -1,7% para igual ejercicio contra una caída del -6,3% en su visión pesimista.

En consecuencia, podríamos afirmar que en definitiva las proyecciones para 2019 realizadas por el FMI son más pesimistas que las que el propio gobierno reflejó en el presupuesto y que las que el propio FMI había estimado para el acuerdo Stand-By en junio: según el FMI, se proyecta una caída del -2,8% del PBI para 2018 y de -1,7% para el 2019; mientras que el gobierno consideró caídas del PBI de -2,4% y -0,5% respectivamente. Entre los componentes de la demanda, se destaca la caída del consumo privado que, según el FMI caerá casi -10% en 2018 y -4,6% en 2019, mientras que según el presupuesto solo caerá -3,4% en 2018 y -1,6% en 2019.

Respecto a la inversión, el FMI proyecta una caída del -7% en 2018, visión mucho más pesimista que la del gobierno, que proyecta para este año un aumento de la inversión del 0,6%. Además, el FMI proyecta un aumento del Índice de Precios al Consumidor de 43,8% para 2018, mientras que el gobierno sólo consideró un incremento de 32,6%.

Por último, el FMI proyecta una caída del crédito al sector privado en términos reales de -5% en 2018 y -4,4% en 2019, un aumento del desempleo del 9,8% a 10,9% entre 2018 y 2019 y que la cuenta corriente de la balanza de pagos continuará siendo deficitaria debido al pago de intereses (-7.000 millones de dólares de déficit de la cuenta corriente en 2019).

En conclusión, el ajuste recae sobre las espaldas de todos y todas, se aumenta el pago de intereses de la deuda, y en definitiva hipotecan la administración de las próximas dos gestiones de Gobierno. Más Deuda, menos Educación, menos Salud, menos Ciencia y Tecnología, menos Obra Pública, menos Salarios y menos bienestar social para las mayorías.

En suma, el ajuste que determinará el futuro de todos y todas oscila los \$ 500.000 millones ¿Pesada herencia?.

Resulta preciso destacar que, guiados por la unidad de concepción que entendemos se materializa en la unidad de acción, es que se propone el rechazo del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la

Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019 reproduciendo los términos y consideraciones que nuestro Bloque del Frente para la Victoria - Partido Justicialista ha expresado en el Dictamen de Minoría que defendió en la Cámara Baja en oportunidad del debate de este Proyecto.

Es así que en el precitado Dictamen, el Bloque FPV-PJ señala “Lo ocurrido con el desempeño de las variables económicas durante el año 2018 muestra de modo contundente que el programa instrumentado por el Presidente Macri desde fines de 2015 fracasó: es profundamente regresivo y recesivo, inestable en el corto plazo, insustentable en el mediano plazo y explosivo en el largo plazo. La realidad de estos últimos tres años deja en claro que las políticas encaradas por el Poder Ejecutivo Nacional son un duro golpe para los sectores medios, para las mayorías populares y también para comerciantes y, empresarios y productores nacionales.

Desde el PEN se afirma que las dificultades y penurias que estamos atravesando los argentinos y argentinas se originan en factores exógenos que atentan contra las presuntamente buenas decisiones de política. Esto es falso: son el resultado inexorable de la política neoliberal y anti-nacional que eligió instrumentar la administración actual del Poder Ejecutivo Nacional cuyos ejes desde el primer momento han sido: el ajuste fiscal, la apertura comercial indiscriminada, la especulación financiera, el endeudamiento desmesurado y la desregulación ciega.

Lamentablemente, es imposible que la situación mejore con el ajuste todavía mayor, con más especulación, menos federalismo y mucho más endeudamiento que cristaliza el proyecto de presupuesto en debate. Esa es la primera y principal objeción que tenemos al proyecto de presupuesto 2019: ratifica y profundiza el rumbo económico iniciado en diciembre de 2015, hipotecando así el futuro de los argentinos y argentinas.”<sup>1</sup>

Por todo lo expuesto, rechazamos este proyecto de Ley y exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que someta a la votación democrática

---

<sup>1</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018



parlamentaria el verdadera Presupuesto que resulta de su nuevo acuerdo con el FMI.

A continuación, reproducimos textualmente y compartimos los términos expresados en el Dictamen suscrito por el FPV-PJ en la Honorable Cámara de Diputados, a saber:

1. Un presupuesto que nació obsoleto: proyecciones macroeconómicas equivocadas<sup>2</sup>

Nuestro rechazo al proyecto de Presupuesto para la Administración Nacional en 2019 se sustenta asimismo en que el escenario macroeconómico sobre el que fue construido ya perdió vigencia. No se trata de un mero error de pronóstico sino de que, en el marco del nuevo -e inconsulto- acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el esquema general de política económica sobre el que se sustenta ha sufrido alteraciones fundamentales que vuelven obsoletas todas las proyecciones del escenario macroeconómico. Y estos cambios, a su vez, modifican de raíz la proyección de gastos e ingresos, que es el núcleo central de la propia Ley de presupuesto. Es decir, al cambiar por completo el escenario macroeconómico, cambia también totalmente la estimación de todas las magnitudes que se encuentran expresadas en el Presupuesto.

Ya habíamos insistido en este punto al momento de evaluar el proyecto de presupuesto 2018 y las objeciones resultaron más que fundadas: allí se pronosticaba una inflación de 10% para fines de 2018 y al día siguiente de la sanción de la Ley de Presupuesto se anunció un incremento de la meta de inflación a 15%, lo que destruyó todo lo que sostenía el presupuesto antes de que comenzara a ejecutarse.

Lamentablemente, además, la realidad resultó mucho peor: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC acumula en los primeros nueve meses de 2018 un incremento de 32,8% y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA así como las consultoras estiman que la inflación a fin de 2018 será cercana al 45%, es decir, cuatro veces lo que estima el presupuesto 2018 vigente.

Para 2019 se vislumbra un panorama aún más grave: mientras se debatía el presente Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2019 en esta Honorable Cámara, ya se modificaron nuevamente el plan y las metas.

Sobre fines de agosto, y a sólo tres meses de haber firmado el primer acuerdo -inconsulto- con el FMI, la devaluación continuaba y el BCRA seguía perdiendo reservas. El PEN decidió una vez más recurrir al FMI para negociar un segundo acuerdo, en el que, además de comprometer el futuro financiero del país, debió alterar el esquema monetario pasando de uno de metas de inflación a otro de control de la base monetaria, bandas cambiarias, y profundizar el ajuste (déficit cero).

---

<sup>2</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

Tampoco son creíbles las estimaciones contenidas en el mensaje que acompaña el presente proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2019 sobre el (de)crecimiento del PIB. Cabe recordar que en el presupuesto anterior se estimó un crecimiento del PIB de 3,5% para 2018. Ahora se reconoce que este año la economía va a caer -2,4%; un error de estimación de seis puntos. En el mensaje que acompaña el proyecto de Ley se estima para 2019 otra caída del PIB de -0,5%. En el caso de que este pronóstico – optimista- se cumpliera, resultaría que tres de los cuatro años del gobierno de Macri serán de caída del PIB. Así, al finalizar los cuatro años que dura un mandato presidencial, el PIB per cápita será por lo menos 5,9% menor que el heredado en 2015. Eso si se cumple la estimación de caída de 0,5% del PIB contenida en este presupuesto, cosa poco probable según la mayoría de los expertos.

Incluso los pronósticos del FMI, habitualmente optimistas para los países que están bajo un Programa del organismo, resultan menos favorables ya que estima una caída del PIB de -2,6% para 2018 y de -1,6% para 2019, tres veces peor que la estimación contenida en el presupuesto. El FMI también proyecta tasas de desempleo cercanas a los dos dígitos para el año próximo.

Ahora bien, desde el punto de vista del propósito y los objetivos que debería tener el Presupuesto, esta circunstancia es absolutamente inaceptable: el proyecto en debate no contiene ninguna propuesta para evitar la recesión y proteger a los sectores perjudicados por este duro paquete recesivo. Es decir, se reconoce que se producirá una caída en el ingreso nacional y no se hace absolutamente nada para evitarlo desde el gobierno. De hecho, el Presupuesto es todo lo contrario: contractivo en lo fiscal y monetario.

## 2. Un presupuesto de ajuste salvaje <sup>3</sup>

Como ya hemos afirmado, el proyecto de ley de presupuesto profundiza el ajuste en curso. El método para alcanzar el déficit cero es que todas las partidas crezcan menos que la inflación esperada. El incremento promedio previsto en los precios es de 32,7% para 2018 y de 34,8% para el 2019. Con esta inflación esperada, el ajuste propuesto en términos reales es abismal.

En caso de ejecutarse el presupuesto 2019 tal como fue enviado por el PEN al HCDN, en el bienio 2018-2019 y en términos reales:

El gasto primario se habrá contraído -13%, con una caída de -11% de los gastos corrientes y de -42% de los gastos de capital.

En cuanto al recorte de gastos corrientes se destacan:

La reducción de -6% en Servicios Sociales; -23% en Educación y Cultura; -48% en Vivienda y Urbanismo; -20% en Promoción y asistencia social; -8% en Salud; -17% en Ciencia y Técnica; -20% en Agua potable y alcantarillado; -30% en Trabajo.

---

<sup>3</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

Transferencias corrientes a provincias: -45%, con caídas de -46% en educación, -28% en Desarrollo Social y -23% en Salud.

Transferencias corrientes y de capital a universidades nacionales: -9% promedio con fuertes disparidades entre las universidades (en algunos casos la reducción real bianual supera el 20%). En este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) votó por unanimidad una propuesta de reformulación que no fue escuchada.

Subsidios económicos: -29%, con un recorte de -10% en energía y -49% en transporte.

Gastos de funcionamiento y otros: -13%; con caída de -11% de salarios de empleados públicos y de -21% de programas como Argentina Trabaja y PROGRESAR, entre otros.

Si bien es atribución del Jefe de Gabinete de Ministros reasignar fondos entre las distintas partidas presupuestarias dentro de cada jurisdicción, en la presentación del presupuesto para los programas de las distintas jurisdicciones y organismos descentralizados se evidencia de manera alarmante la reducción real de los fondos destinados a programas de gran relevancia dentro de áreas críticas como salud, educación, cultura y ciencia y tecnología; así como el virtual vaciamiento de varios organismos descentralizados. A continuación se detallan algunos de los casos más preocupantes:

#### Ministerio de Educación, cultura ciencia y tecnología

Los mayores recortes se observan en las partidas para Infraestructura y Equipamiento, que cae un 69% nominal y un 77% en términos reales, el Plan Nacional de Educación Digital sufrirá una baja del 59% nominal y del 69% real, las Acciones de Formación Docente se reducen un 14% nominal y 36% real. Por otro lado, y pese a las principales promesas de "solucionar el déficit de infraestructura histórico", los programas de Fortalecimiento Edificio de Jardines de Infantes se reducirán un 57% en términos nominales y un 68% real.

Además, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en el proyecto presentado reduce -23% en términos reales respecto de 2018. Si se aprobara el presupuesto presentado, en el bienio 2017-2019 el FONID acumulará una reducción real de -39%.

Programa 39: Innovación y desarrollo de la formación tecnológica. Este programa administra el Fondo para el Financiamiento de la ETP establecido por el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 que establece que el presupuesto destinado a este sector no podrá ser inferior al 0,2% de lo presupuestado para el sector público Nacional. Sin embargo, en el proyecto de ley de Presupuesto 2019 se asignan créditos por \$4.420.560.334. Este monto está incumpliendo con lo establecido en la Ley 26.058, además de ser sensiblemente menor al del presupuesto vigente en 2018.

El recorte propuesto para los programas del área de cultura también es escandaloso. Algunos ejemplos son:



Apoyo Económico a Bibliotecas Populares: se prevé un recorte del -25% nominal que implica una caída real de por lo menos -45%.

Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes: -37% nominal; -53% real

Programa “El Estado en tu Barrio”: el presupuesto se reduce casi a la mitad (-86% nominal; -89% real)

Actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional: el crédito asignado se reduce -88%. Es decir que en términos reales la contracción llega la -91%.

#### Ministerio de Salud y Desarrollo Social

El Presupuesto total asignado en el proyecto 2019 a la Secretaría de la niñez, adolescencia y familia (SENNAF) es de \$3.305.474.918,32 lo que representa una reducción nominal de 1% y real del 26,7% respecto de 2018. El recorte presupuestario y programático que se viene produciendo sistemáticamente desde el año 2016 en la SENNAF como ente rector de las Políticas destinados a los Niños, Niñas y Adolescentes, conforme las competencias el Art. 43 y 44 de la Ley 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” se ve a su vez representado en las sucesivas subejecuciones del 47,7% en el 2017 y del 56% en lo que va de la ejecución del presupuesto 2018.

Pero más alarmante aun es el recorte que se viene implementando en las políticas públicas destinadas a la primera infancia de la SENNAF quien por Ley 26.233 de Promoción y Regulación de Centros de Desarrollo Infantil se ocupan de la atención integral de Niños y Niñas desde los 45 días hasta los 4 años. En efecto, el Programa 47 de “Promoción y Asistencia a los espacios de Primera Infancia” tuvo una subejecución de 76% en el 2017 y un 76% en lo que va del 2018. Sumado a eso, y de mucha gravedad es el hecho que el presupuesto presentado en el proyecto de ley sea de la mitad del vigente en términos nominales, lo que representa una reducción real del 66%.

Estos ajustes se producen en el crítico contexto provocado por las políticas económicas implementadas por el PEN con grave impacto en la vida cotidiana de los casi 13.000.000 de Niños, Niñas y Adolescentes, de los cuales el 48% son pobres y un 33% debe asistir a alimentarse a un comedor escolar o comunitario, viéndose afectados cotidianamente sus derechos.

El presupuesto asignado para 2019 para la Secretaría de Gobierno de Salud presenta una reducción real del 8,1%, con una disminución de un 0,17% en su participación del presupuesto total. Resulta imprescindible que el organismo nacional responsable de la Salud como mínimo mantenga un presupuesto que supere las proyecciones de inflación y su participación del presupuesto nacional aumente.

El Programa Atención de la Madre y el Niño presenta una reducción del 76,4% en términos reales, con una reducción en actividades claves como Salud integral en la adolescencia, Salud Escolar, Detección

Temprana y Atención de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Cabe destacar que durante 2018 este programa tuvo una reducción en su presupuesto inicial del 16%.

La compra de Leche fortificada para asistencia nutricional de niños y niñas menores de 6 años, desnutridos y embarazadas que se realizaba a través de este programa se había reducido en 5 millones de kg en 2018 y se prevé reducirla aún más en 2019. Frente a un contexto de aumento de la demanda en comedores barriales, debido a los altos precios de los alimentos, resulta fundamental aumentar la compra y distribución de kilogramos de leche fortificada que se entrega en los centros de atención primaria del país.

El Programa Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Política de salud que contempla actividades para el Desarrollo en Estudios e Investigaciones del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales de acuerdo a la Ley 27.350 sancionada en 2018, tiene asignado un presupuesto mínimo (\$450.000). Resulta fundamental para la implementación de la ley aumentar la partida presupuestaria para este programa.

El Programa Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual tienen asignado para 2019 \$3.103 millones. Este programa tiene una fuerte dependencia externa en sus compras de medicamentos e insumos. Con el dólar proyectado (40,1), equivalen a 77 millones de dólares. Según denuncian organizaciones de personas viviendo con VIH –y lo que manifestó su ex Director-, para que el presupuesto se mantenga en los niveles de 2018, deberían asignarse a la Dirección de Sida por lo menos \$5.100 millones de pesos. Resulta fundamental aumentar los créditos asignados a este programa y las metas propuestas para sostener los tratamientos y los estudios serológicos necesarios para el adecuado seguimiento del VIH y las enfermedades de transmisión sexual y evitar futuras epidemias de estas enfermedades en nuestro país.

El programa de Promoción de la Salud y reducción de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles presenta una reducción nominal de 11,4% respecto a 2018 que representa una merma real de 34%, a pesar de que en el propio Mensaje de Presupuesto 2019 elaborado por el PEN se establece que “entre las prioridades del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para 2019 se encuentra el combate de la obesidad y malnutrición infantil, una epidemia que ha crecido durante los últimos años y afecta principalmente a los niños de menores recursos”. No queda claro con qué recursos dispondrá la secretaria para lograr el objetivo que se propone cuando reducen el presupuesto del área responsable de dicha tarea.

Para el programa Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable propone una real del 14,7% en el crédito asignado de acuerdo a la inflación promedio estipulada para 2019. Este programa responsable de la compra y distribución de métodos anticonceptivos a todos los efectores de salud públicos del país, ha reducido sus metas en tratamiento entregados y distribución de preservativos desde 2016

a 2019, que pone en riesgo la adecuada cobertura de la salud sexual y reproductiva en nuestro país. Resulta fundamental volver a las metas propuestas para 2016 para alcanzar una adecuada cobertura de la población objetivo del programa.

La Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo descentralizado en el ámbito del mismo ministerio, tiene una reducción del crédito asignado de 23% nominal que representa una reducción real del 44%. Cabe destacar que durante 2018 este programa tuvo una reducción en su presupuesto inicial del 8,1%. El fomento y desarrollo de los laboratorios de producción pública de medicamentos resulta en una estrategia clave para la reducción de los precios de los medicamentos en nuestro país. Por lo cual es fundamental aumentar las partidas presupuestarias para esta Agencia para 2019.

También es indispensable que se aumenten los créditos asignados para los Hospitales Nacionales y SAMIC, así como los Institutos Nacionales como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán que desarrollan tareas claves de asistencia así como el estudio y control de enfermedades endémicas.

Recortes en otros organismos descentralizados y entes:

El proyecto de presupuesto 2019 profundiza el desfinanciamiento de la mayoría de los organismos descentralizados y entes del Estado Nacional. En muchos de ellos el presupuesto real asignado se contrae en más de un tercio lo que sin dudas traerá aparejadas severas consecuencias para su normal funcionamiento, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, se trata de institutos de formación, investigación y atención a grupos vulnerables. Las reducciones más severas se evidencian en:

1. Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos: -15% nominal; -39% real;
2. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): -13% nominal; -37% real;
3. Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CNAE): -12% nominal; -36% real;
4. Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): -7% nominal; -33% real;
5. INCUCAL: -5% nominal; -32% real;
6. SEDRONAR: -3% nominal; -30% real;
7. INADI: -3% nominal; -30% real
8. CONICET +23% nominal; -9% real

3. Un presupuesto con más deuda y más ajuste <sup>4</sup>

Hay una única excepción al declive generalizado de los gastos e inversiones públicas. Una partida que crece escandalosamente mientras todo lo demás se derrumba: los servicios vinculados a la

---

<sup>4</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

Deuda Pública. En el bienio se habrán incrementado en términos reales un 48%.

Hasta la crisis de 2018, el PEN argumentaba que el fuerte crecimiento del endeudamiento se debía a la voluntad de moderar el supuestamente imprescindible ajuste. A partir de la última corrida cambiaria y de su acuerdo con el FMI, el discurso cambió diametralmente. Ahora justifica el ajuste feroz porque intenta liberar recursos para pagar los intereses de la deuda contraída. Es decir: endeudó al país para no ajustar y ahora ajusta mucho más por haberse endeudado. El discurso con el que justifica sus actos y decisiones es contradictorio y hasta absurdo. En realidad, desde un principio, el endeudamiento contraído, fundamentalmente en moneda extranjera, responde a la dinámica de especulación financiera que el programa económico propicia.

Lo cierto es que la participación del pago de servicios de la deuda en el presupuesto casi se triplicaría entre 2015 (6% del presupuesto) y lo que se propone para 2019 (16%). El pago de intereses de la deuda estimado para 2019 suponiendo un dólar promedio a \$40 es de 746.389 millones de pesos. Es decir: todo lo que se ajusta en las partidas correspondientes a salud, educación, ciencia, inversión social y obra pública. Es decir, la austeridad sólo afecta los gastos inversiones vinculados a las funciones centrales del Estado, ya que se observa una exponencial expansión en los gastos financieros.

Según el proyecto de presupuesto presentado, la deuda total de la Argentina llegará en 2019 a 331.971 millones de dólares representando el 75,3% del PIB. En 2015, rozaba el 40% del PIB. Es decir que al finalizar su mandato presidencial Macri habrá casi duplicado la deuda. Los más de U\$S 100.000 millones que creció la deuda (sin contar los U\$S 57.100 millones del FMI) no se han empleado ni para obras de infraestructura, ni industrias, ni salarios ni mejora en las condiciones de vida. Lo que se ha incrementado sustancialmente, debido a la desregulación absoluta de la cuenta capital, es la formación de activos externos (la llamada fuga de capitales) que asciende a más de U\$S 60.000 millones.

Lo cierto es que el proyecto de ley de presupuesto 2019 que se pretende votar y que aquí rechazamos, además, fue elaborado con anterioridad al nuevo acuerdo con el FMI. En la medida en que dicho acuerdo se negoció la anticipación de U\$S 19.000 millones durante 2019 que se suponía que ingresarían a partir de 2020; no sólo se está extendiendo el límite máximo de endeudamiento propuesto en el proyecto, sino que se recibiría casi el 90% del total de los fondos comprometidos durante el mandato del actual Poder Ejecutivo. De este modo, este gobierno tiene cubiertas prácticamente todas sus necesidades financieras hasta fin del año próximo, pero al costo de que quien asuma después estará condicionado por el FMI, tendrá que empezar a devolver el crédito y no contará con financiamiento adicional.

#### 4. Un presupuesto contra los adultos mayores<sup>5</sup>

El proyecto de presupuesto 2019 bajo análisis constituye una profundización del verdadero saqueo al que han sido sometidos los adultos mayores desde que asumió la actual administración del PEN. Continúa el ajuste real de los haberes, prohíbe seguir trabajando a quienes accedan a la degradada Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y permite liquidar activos del FGS por \$ 74.000 millones.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, los jubilados perdieron más de una jubilación por año (4,5 jubilaciones en 33 meses de gobierno). Además, el acceso al derecho se precarizó: quienes no logran aportar los años requeridos deben conformarse con una PUAM cuyo beneficio es un 20% menor que el haber mínimo.

La concepción misma de la PUAM y las limitaciones que se pretende imponer a los beneficiarios en el proyecto de presupuesto reflejan la manera en que este gobierno entiende el funcionamiento del mercado de trabajo: al igual que en la década de los noventa, vuelve a responsabilizarse a los individuos por la calidad de su inserción laboral, castigando a quienes no logran tener trayectorias estables.

Adicionalmente, comenzó la liquidación del Fondo de Garantía Sustentabilidad de la ANSES (FGS).

#### 5. Un presupuesto contra los trabajadores, el mercado interno y la industria<sup>6</sup>

Desde que asumió el Presidente Macri y hasta julio de 2018, el salario promedio acumula una caída de -9,1% y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) —establecido unilateralmente por el PEN— de -16,4%. El desempleo llega ya a 9,6%, rozando los dos dígitos.

Entre noviembre de 2015 y junio de 2018 se perdieron -6.851 empleos privados registrados, de los cuales -87.862 eran trabajos industriales. Según estadísticas oficiales cerraron 7.500 PYMES.

Las empresas cierran porque las ventas se deterioran sistemáticamente -el consumo masivo acumula una caída de -8,3% desde 2015-, y la feroz apertura importadora las limita aún más; los tarifazos y las tasas de interés estratosféricas ponen en riesgo el funcionamiento mismo de las empresas. Por eso el Uso de la Capacidad Instalada industrial está en apenas un 60%, un nivel similar al de 2002.

No es abstracto. No es exógeno. La política económica elegida por el actual gobierno ocasiona estos resultados: la lluvia de inversiones no llegó nunca, el boom exportador tampoco y el mercado interno agoniza.

---

<sup>5</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

<sup>6</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018



Los trabajadores y trabajadoras cada vez tienen menos ingresos porque les rinde menos el salario, porque se quedan sin empleo o porque funden sus emprendimientos. Y para peor, casi se duplica la cantidad de trabajadores que pagan de Impuesto a las Ganancias cuando se les había prometido que iban a dejar de pagar ese impuesto.

El proyecto de presupuesto presentado empeora el cuadro: asfixia los salarios estatales, reduce las partidas destinadas a trabajo y promoción de la industria, y propone eliminar exenciones en el cálculo del impuesto a las ganancias como viáticos, gastos de representación, combustibles.

Como se ve, en medio de una situación de crisis, este presupuesto no contiene ni una sola medida a favor de las Pymes, la industria, el comercio y los trabajadores.

6. Un presupuesto contra el federalismo en general y contra la Patagonia en particular <sup>7</sup>

Poco antes de presentar el proyecto de presupuesto 2019, se eliminó por decreto el Fondo Federal Solidario (conocido como “Fondo Sojero”) que representaba \$50.000 millones para las provincias, y se aumentaron las retenciones a las exportaciones a \$4 por dólar, pero ya no se coparticipan.

El proyecto de presupuesto presentado sigue avanzando contra las finanzas provinciales: se impone un recorte en los subsidios al transporte y a la energía, trasladando el costo a las provincias y el costo real a los usuarios. Son otros \$126.000 millones que la Nación deja de transferir a las provincias y CABA.

Además se propone una reducción de las transferencias a las provincias y municipios en un total de 173.000 millones de pesos.

La propuesta es que cada jurisdicción gestione el faltante como pueda. Con esta metodología, siempre terminan perjudicadas las provincias más pobres, los grupos más vulnerables y los usuarios en general. Con estas políticas se profundiza la disparidad existente entre las provincias y la inequidad en las oportunidades de vida de sus habitantes.

Adicionalmente, entre las modificaciones normativas que se pretenden hacer pasar dentro del proyecto de presupuesto 2019 se propone reducir a la mitad la bonificación por zona desfavorable que cobrarán los nuevos jubilados y beneficiarios de pensiones no contributivas. Esto significa casi \$2.000 pesos mensuales menos para quienes perciban el haber mínimo. También se propone reducir las bonificaciones por zona para los trabajadores que reciben Asignaciones Familiares en la Patagonia en casi \$1.500 por hijo.

Esta medida que desalienta la instalación de nuevos trabajadores en el sur del país se suma a la quita del reembolso para los puertos

---

<sup>7</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

patagónicos, el retiro de los programas de incentivo para industrializar Tierra del Fuego, y la reducción de los subsidios para calefaccionar las zonas más frías del país que se implementaron desde diciembre de 2015.

## 7. Un presupuesto “sábana”: agregados y omisiones<sup>8</sup>

Tal como se pretendió en múltiples ocasiones durante la actual gestión -el ejemplo más memorable es la llamada “Ley de Reparación Histórica” que tras la fachada de una supuesta mejora para los jubilados escondía un blanqueo de capitales-; una vez más, en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019 se recurre a esta estrategia y en el articulado se encuentra también una reforma impositiva, una reforma previsional, una reforma laboral y hasta de la Ley de Administración Financiera que, en su versión original, permitía una reestructuración de deuda como la del Megacanje.

Si se pretende que junto a la Ley de Presupuesto se voten modificaciones normativas ajenas a ésta, podría aprovecharse para reforzar derechos y proteger a los sectores más vulnerables en vez de impulsar reformas que atentan contra el bienestar de la mayoría de los argentinos y argentinas.

Por ejemplo, y habida cuenta del carácter estratégico que posee el FGS para la garantía del sistema público de reparto, se podría haber declarado de interés público (mediante la derogación del artículo 35 de la Ley 27.260 conocida como de Reparación Histórica, restituyendo así la vigencia de la ley N°27.181 de “Protección de las Participaciones Sociales del Estado Nacional” del 2015) la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del FGS, y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde los Ministerio de Hacienda o Finanzas Públicas posean tenencias accionarias o de capital. Una medida de este tipo permitiría dar certeza a los beneficiarios de la seguridad social de que no serán los recursos de los jubilados presentes y futuros los que serán usados para llenar los huecos de la crisis económica a la que nos ha llevado el gobierno nacional, y que de ninguna manera serán los jubilados los que deberán sacrificarse para hacer frente a los compromisos con acreedores extranjeros o cualquier otro objetivo que no sea la garantía del derecho a la seguridad social consagrado en nuestra carta magna y tratados internacionales.

En la misma línea y con objetivos análogos, se podría proponer también la derogación del art 154 del decreto 27/2018, denominado por la opinión pública “mega DNU” en el cual se habilita la estructuración de fideicomisos para la administración de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, prohibiendo en adelante tales disposiciones, habida cuenta de que podría suponer un proceso de privatización de la administración de los recursos de la seguridad social sin control alguno sobre plazos, comisiones o de qué ente privado lo administraría; o prohibir la transferencia y/o cualquier otro

---

<sup>8</sup> HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, BLOQUE FPV-PJ, DICTAMEN DE MINORÍA PRESUPUESTO EJERCICIO 2019, OD 536/2018, 24/11/2018

acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos activos del Fondo, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.

Otra modificación normativa, ajena al presupuesto pero beneficiosa para los grupos más vulnerables de la población que podría haberse incorporado en vez de las propuestas por el oficialismo, es un artículo tendiente a garantizar que las pensiones por discapacidad otorgadas gozaran de plena estabilidad e intangibilidad. De este modo, se estarían limitado los efectos de la resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otras disposiciones, a través de las cuales se intentó adicionar requisitos a los beneficiarios de las pensiones por discapacidad de modo tal que tornaron excesivamente burocrático su seguimiento, desalentando a los titulares del derecho para sostener su acceso a la pensión. Mediante dicha resolución no sólo se dieron de baja pensiones de personas que no tienen un porcentaje suficiente de invalidez, sino que se buscó detectar incompatibilidades con el decreto por el cual se crearon las mismas, en 1997. Este proceso tuvo por inicio la baja masiva de pensiones del año 2016. En ese entonces se presentó ante la justicia federal una acción colectiva solicitando la suspensión de esa medida, que finalmente obtuvo una cautelar favorable.

En la misma línea que las reformas a introducir descriptas, una modificación adicional que tendría por objeto favorecer a un colectivo postergado como el de los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales, sería la de garantizar la percepción del haber mínimo jubilatorio para estos. Los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales no son considerados propiamente jubilados y pensionados, por lo que no tienen derecho a subsidios, tarifas sociales y demás regímenes y beneficios especiales, principalmente los afectados son las pensiones por fallecimiento y los retiros por discapacidad. Se trata de un universo de alrededor de ciento treinta mil personas que se jubilaron por ese régimen entre 1995 y 2008. De esa cantidad, al menos veinte mil beneficiarios cobran menos que la jubilación mínima (perciben entre \$300 y \$5000). Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Etchart, Fernando Martín c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos”, por unanimidad, reconoció el derecho de un jubilado por invalidez, que cobra su prestación a través de una compañía de seguros, a percibir de la ANSES las sumas necesarias para que su renta vitalicia previsional alcance el importe del haber mínimo legal. El Tribunal tuvo en cuenta que el hecho de que cobrara su haber de retiro a través de una compañía de seguros no justificaba su exclusión del ingreso mínimo garantizado por el Estado al resto de los pasivos para hacer frente a las condiciones básicas de subsistencia. En este contexto de ajuste sobre los más débiles, resulta imperioso proteger a este colectivo especialmente postergado modificando los arts. 125 de la ley 24.241 y 5 de la ley 26.425 en el sentido propuesto.

El proyecto de presupuesto 2019 que incorpora por la ventana modificaciones normativas antipopulares, omite también garantizar transferencias para el adecuado funcionamiento de empresas

estatales como por ejemplo NASA (Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima) y PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) del sector nuclear. Si realmente se pretendiera proteger a los argentinos y argentinas de las consecuencias de las políticas económicas que se están implementando, podrían haberse agregado al articulado del proyecto de presupuesto modificaciones a la Ley 27.271 de Fomento a la Inversión en Vivienda para proteger a los ahorristas frente a la escalada de precios poniendo un tope al aumento de las cuotas.

## 8. Conclusiones

En consecuencia, se observa necesario, dejar constancia de vuestra postura postura frente a la afectación de los derechos de nuestro Pueblo y la constitución de la hipoteca más gravosa que deberán enfrentar las generaciones futuras de aprobarse definitivamente los términos contenidos en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019 diseñado por el Gobierno Nacional.

Es por ello que, en razón de las consideraciones expuestas, y las que dará oportunamente el miembro Informante respecto del Proyecto de ley venido en revisión registrado bajo expediente CD 32/18 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019, del expediente CD 36/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (referencia CD 32/18) y, del Expediente CD 37/18 que comunica Fe de Erratas en el Proyecto de ley venido en revisión de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2019 (referencia CD 32/18); se aconseja su rechazo.

Marcelo J. Fuentes